

**DEFENSORÍA DELEGADA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LA  
POBLACIÓN CIVIL COMO CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO**  
Sistema de Alertas Tempranas – SAT

**NOTA DE SEGUIMIENTO N° 026-07**  
**Primera Nota al Informe de Riesgo N° 001-07 A.I.**  
**del 2 de febrero de 2007**

Fecha: Junio 8 de 2007

**LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO**

Departamento	Municipio o Distrito	Zona Urbana			Zona Rural		Territorio Étnico	
		Cabecera, Localidad o Zona	Comuna	Barrio	Corregimiento	Vereda	Resguardo	Territorios Colectivos.
SUCRE	San Onofre	Casco Urbano			Pajonalito, Pajonal. Palo Alto, Buenos Aires, Las Brisas. Don Julio, Cañas Frias, Libertad, Sanas de Mucacal y el Cerro de Dos Casas, Rincón del Mar			

**VALORACIÓN DEL CIAT**

FECHA DE REUNIÓN DEL CIAT	VALORACIÓN DEL INFORME DE RIESGO
5 y 7 de febrero de 2007	Declaró Alerta Temprana

## RECOMENDACIONES DEL CIAT

El Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas, CIAT, tomó la decisión extraordinaria de declarar la Alerta Temprana el 5 de febrero de 2007 una vez el IR 001 – 07 fue presentado por la Defensoría del Pueblo. En esta oportunidad recomendó:

- Al Director de Protección de la Fiscalía General de la Nación, al Director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, al Gobernador de Sucre y al Alcalde de San Onofre, de forma individual, se les informó sobre la decisión de considerar el Informe de Riesgo como Alerta Temprana y se les instó, como Organizaciones del Estado que tienen el deber de protección para que atiendan y velen por la seguridad de la población involucrada en el Informe de Riesgo N° 001 de 2007.

En reunión regular del CIAT el 7 de febrero recomendó:

- Al Alto Consejero Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, que se dispongan las medidas de protección de las mujeres cabeza de familia, el registro de las tierras y se adelanten las acciones correspondientes que permitan prevenir futuros desplazamientos forzados.
- Al Comandante del Departamento de Policía de Sucre y la Comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina, de forma independiente, que se adopten las medidas urgentes frente a las acciones de los nuevos grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona. De igual manera se recomendó la adopción de medidas que garanticen la seguridad y derechos de las organizaciones sociales y comunitarias descritas en el documento, así como de sus líderes y de la comunidad en general, en cumplimiento a lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en lo relativo a los esquemas de protección de las organizaciones sociales y defensores de Derechos Humanos.
- Al Jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia MAPP-OEA, al delegado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – OACNUDH en Colombia y al Alto Comisionado para la Paz, de forma independiente, para que en el marco de las tareas de verificación y cese al fuego y hostilidades, en lo relativo al proceso de desmovilización del Bloque Héroes de los Montes de María de las AUC, se exhorte a éstos al cumplimiento de los acuerdos.

## NUEVA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Las víctimas de las autodefensas que promueven acciones tendientes a la verdad, justicia y reparación continúan bajo riesgo por la posible ocurrencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones a los Derechos Humanos, por las acciones de grupos armados ilegales que operan en la

zona manteniendo el control político y económico del desmovilizado Bloque Héroes Montes de María (BHMM) de las AUC.

La MAPP/OEA en su Octavo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente alertó sobre un posible rearme en el departamento Sucre, pues esta Misión recibió información acerca de “una estructura proveniente del Atlántico que tendría como objetivo apoderarse del control económico y político que ejercía el desmovilizado BHMM. Esta organización habría contactado a las personas que administraban las finanzas del bloque en la zona y a personas e instituciones que venían siendo extorsionadas para apropiarse de esos recursos. Esta situación habría generado una disputa entre desmovilizados, produciendo varios homicidios”

Una vez desmovilizado el Bloque Héroes Montes de María de las AUC y su comandante Rodrigo Pelufo, alias *Cadena*, desapareció de la Zona de Ubicación, empezaron a circular rumores acerca de la incursión en San Onofre de otro grupo denominado “*los de Barranquilla*”, el cual, al parecer, estaba conformado por mandos medios desmovilizados y no desmovilizados del Bloque Norte. Estos rumores empezaron a perder fuerza durante los últimos meses coincidiendo con la declaración de Alerta Temprana para este municipio, pero no se puede descartar que este grupo o *La Nueva Generación*, como se autodenominaron en su momento, se encuentren en una fase de reorganización y fortalecimiento, principalmente si se tiene en cuenta que su principal fuente de financiación, el narcotráfico, persiste.

Al respecto, es importante tener en cuenta la importancia estratégica que tiene el municipio San Onofre para los grupos armados irregulares: en su territorio se acopia droga proveniente de las regiones del Sur de Bolívar, el Bajo Cauca Antioqueño y otras zonas en menor medida y posteriormente es sacada en lanchas rápidas por el Golfo de Morrosquillo, por lo que diferentes grupos ilegales han disputado el control de este corredor en diferentes oportunidades. Es necesario recordar que Alias “Cadena” jefe paramilitar, tenía su epicentro en la finca El Palmar, sobre la vía que conduce desde San Onofre hacia los corregimientos costeros de Rincón del Mar y Berrugas.

En este contexto después de emitida el Informe de Riesgo y la Alerta Temprana para este municipio se han registrado hechos contra la población civil. En especial riesgo continúan las mujeres, quienes han asumido un papel protagónico dentro de las organizaciones de víctimas en San Onofre. Uno de estos hechos fue el desplazamiento forzado de la señora Rosalba Barleta y posteriormente exilada, quien tuvo que abandonar el país tras recibir amenazas contra su vida, una vez que denunció públicamente el homicidio de su hermano, Hugo Barleta (29 de junio de 2006) a manos de grupos paramilitares, durante la Audiencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, realizada el 27 de Noviembre de 2006 en este municipio. La señora Barleta permanece en el exterior pues no se le han brindado las garantías necesarias para que retorne y se mantiene como depositaria de una doble victimización.

Asimismo, las hijas de una de las mujeres que participó en el homenaje a las víctimas, realizado el 28 de febrero de 2007, en una de las fosas encontradas en la finca El Palmar, ubicada en el corregimiento Rincón del Mar, fueron objeto de amenazas y atentados contra sus bienes. A una de ellas, Ana Rosa Olivo Cárdenas, le fue quemada su casa ubicada en el Barrio EL Porvenir de San Onofre en los días siguientes a la ofrenda y a la otra, Aura Eligia Olivo Cárdenas, quien está en condición de desplazamiento forzado fuera del municipio San Onofre y el gobierno no la reconoce en sus registros y

al regresar para el homenaje de rememoración, fue amenazada con un plazo perentorio de 24 horas para abandonar la región. Adicionalmente, la madre de estas dos mujeres, Doña Lorenza Cárdenas, sufre la desaparición de un hermano José Luis Olivo Cárdenas y el asesinato de otro, su sobrino Euclides Cuada Bello, a quien homenajeaban.

Estos casos se suman a otros registrados en el país en los que las mujeres han sido objeto de hechos de violencia como consecuencia de las acciones emprendidas por ellas en busca de la justicia, la verdad y la reparación. Algunos de los hechos más relevantes fueron los homicidios de Yolanda Izquierdo y Carmen Cecilia Santana, ocurridos el 31 de enero de 2007 en Montería, Córdoba, y el 7 de febrero de 2007 en Apartado, Antioquia, respectivamente. Yolanda Izquierdo representaba a un grupo de personas desplazadas que reclaman la devolución de tierras despojadas por los grupos paramilitares que operaban en el departamento, mientras que Carmen Santana era dirigente sindical, parte de la Comisión de Reclamos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Bananero, SINTRAINAGRO

Tomando como referencia estos acontecimientos y en el marco del informe del 18 de octubre de 2006, *"Las Mujeres Frente a la Violencia y la Discriminación Derivadas del Conflicto Armado en Colombia"*, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es evidente que el desempeño de las mujeres en las experiencias organizativas que buscan incidir en la agenda pública, en especial en este caso en la solución del conflicto armado, ha llevado a que esta participación sea "una actividad peligrosa en donde las defensoras de los derechos de las mujeres y sus seres queridos se exponen a la violencia y al desplazamiento".

Igualmente, evidencia que las mujeres víctimas en San Onofre están principalmente expuestas a la violencia psicológica, "como resultado de sus relaciones afectivas como hijas, madres, esposas, compañeras o hermanas", "a ser víctimas de desplazamiento forzado y el consecuente desarraigo de sus hogares, vida cotidiana comunidades y familias", y "la violencia destinada a hacerlas objeto de constante pautas de control social impuestas por grupos armados ilegales en las comunidades que habitan territorios que estos grupos mantienen bajo su control". (ver: *Las Mujeres Frente a la Violencia y la Discriminación Derivadas del Conflicto Armado en Colombia* En: Informe CIDH del 18 de octubre de 2006, páginas 22 y 23)

Se debe recordar que es obligación del Estado colombiano, al suscribir la convención de Belem Do Pará, *Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer de 1994*, actuar con diligencia y "tomar especial cuenta en la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueden sufrir las mujeres" y a las mujeres que "están particularmente expuestas al menoscabo de sus derechos y a sufrir discriminación en función a más de un factor" que puedan ser "doblemente abusadas o victimizadas por los grupos armados, en su lucha por controlar recursos y territorios".

Asimismo, la CIDH al examinar la situación de la mujer en el conflicto armado colombiano, reiteró la ausencia de una política estatal integral que aborde el impacto específico del conflicto armado en los derechos humanos de las mujeres, que en el nivel local se expresa gravemente en el municipio San Onofre, y ratifica las fallas notables en el diagnóstico, prevención y alerta temprana de diversas formas de discriminación y violencia contra las mujeres que se ven agravadas por el conflicto armado. El Estado tiene la obligación de emplear la diligencia necesaria a fin de erradicar la violencia y la

discriminación contra las mujeres, como parte de los compromisos internacionales contraídos y del mandato de la ley de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición de las víctimas, en especial aquellas que pertenecen a grupos vulnerables.

De otro lado, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, en desarrollo de las funciones asignadas por la Ley 975 de 2005, de Justicia y Paz, ha recibido cerca de cincuenta (50) declaraciones de las víctimas en el corregimiento Libertad del municipio San Onofre, por lo que se les debe prestar especial protección a estas personas para que sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación no les sean vulnerados. Las víctimas de este corregimiento han expresado el temor que sienten por las posibles retaliaciones que pueda tomar el desmovilizado jefe paramilitar de la zona, alias *El Profe*, quien se encontraba en prisión y fue dejado en libertad hace pocos meses, contra los pobladores de este corregimiento por su resistencia ante las acciones ejecutadas por estos grupos en el pasado. Este temor se acrecienta por la desprotección a que se ven sometidos después del retiro de la Fuerza Pública el año anterior y el incumplimiento en la instalación del puesto de policía en el corregimiento. Al respecto, se tuvo conocimiento que se está planeando construir la estación entre la escuela y el puesto de salud y al lado del parque del corregimiento, en contravención al Derecho Internacional Humanitario.

De igual forma, en el mes de marzo de 2005, por solicitud del comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina de entonces, algunas víctimas de los grupos paramilitares de esta comunidad, así como las de otros corregimientos como Berrugas, denunciaron los hechos que habían cometido dicho grupo en la base militar ante personas que la Infantería presentó como de la Fiscalía General de la Nación, provenientes de Medellín y Barranquilla. Actualmente no se conoce el destino de estas denuncias, pues ante los requerimientos que ha hecho la comunidad para conocer el estado de las investigaciones, la Fiscalía dice no tener conocimiento sobre estas denuncias.

El 23 y 25 de abril de este año, miembros del Movimiento Nacional de Víctimas, quien también ejerce el cargo de vicepresidente del Polo Democrático, Roberto Serpa, fue amenazado reiterativamente por parte de desconocidos que se le han acercado en dos oportunidades y le dijeron “que era un sapo porque estaba denunciando”, “que es culpable del escándalo que se está armando y tiene todo revuelto” y que “él estaba denunciando porque así iba a ganar las elecciones”. En las dos ocasiones en que la Defensoría del Pueblo se ha reunido con las víctimas de San Onofre, la dirección del movimiento de víctimas ha reiterado como desde el mes de febrero de 2006, han sido amenazados verbalmente. Adicionalmente, reclaman medidas cautelares para José Díaz, líder de la comunidad, Adriana Porras Murillo y Eucadio Banques, líderes habitantes del corregimiento La Libertad

Por último, en el marco del seguimiento a las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con las que cuentan algunos de los miembros del Movimiento Nacional de víctimas, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha incumplido con la realización de las reuniones mensuales que se pactaron entre el Gobierno y este grupo de víctimas.

En el marco de los compromisos internacionales el “Estado colombiano está obligado a aplicar debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres, agravada por el conflicto armado, aunque el conflicto presente desafíos estructurales a esta respuesta”.

De acuerdo a lo expuesto, se puede inferir que a pesar de las acciones desplegadas por las autoridades civiles y de Fuerza Pública, para proteger a la población en riesgo, aún persisten los factores de amenaza contra los pobladores y líderes sociales y políticos de San Onofre, que hace prever la comisión de atentados contra la vida, integridad y libertad personal por parte de grupos armados irregulares, que se pueden concretar en amenazas, desapariciones, homicidios selectivos o múltiples, la utilización de métodos y medios para generar terror en esta población, restricciones sistemáticas a las libertades personales, la libre asociación y participación en la conformación, ejercicio y control del poder político, en este sentido y teniendo en cuenta la proximidad de los comicios del 2007, es probable que se presenten acciones de presión y constreñimiento contra candidatos y dirigentes políticos que participarán en la contienda electoral o acciones de sabotaje y delitos contra el derecho al sufragio.

## RECOMENDACIONES

Previo estudio de la presente Nota de Seguimiento, se solicita al CIAT mantener la Alerta Temprana correspondiente y orientar a la adopción de medidas que lleven a conjurar, mitigar o controlar la situación de riesgo, con el fin de proteger la población civil del municipio San Onofre, en especial a las víctimas de las autodefensas que promueven acciones tendientes a la verdad, justicia y reparación, y entre ellas especial y primordialmente a las mujeres. Asimismo, brindar atención humanitaria de emergencia si así fuere el caso a los pobladores que han sufrido el rigor de la violencia. En especial se considera necesario recomendar:

1. A la Consejera para la Equidad de la Mujer de la Presidencia de la República, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Instituto Colombiano de Bienestar familiar, para que en el marco de los compromisos internacionales adopten medidas para dar cumplimiento al Informe del 18 de octubre de 2006, "Las Mujeres Frente a la Violencia y la Discriminación Derivadas del Conflicto Armado en Colombia", de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en lo relativo a la protección de las mujeres víctimas de San Onofre.
2. Al Ministerio del Interior y de Justicia, diseñar e implementar políticas y planes especiales para brindar seguridad y protección a las víctimas, con el fin de garantizar el derecho de las mismas a la verdad, la justicia y la reparación, como también a los líderes sociales y dirigentes políticos que aspiran participar en los comicios de Octubre de 2007 como candidatos a corporaciones públicas del nivel regional y municipal.
3. A la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo a lo preceptuado en la Ley de Justicia y Paz, diseñar medidas tendientes a garantizar de manera efectiva la protección de las víctimas y realizar las coordinaciones, que sean del caso, con las autoridades competentes, para que se implementen acciones preventivas dirigidas a proteger la dignidad de las víctimas.
4. A la Presidencia de la Republica, programa de Acción Social, para que disponga de medidas de protección de las mujeres cabeza de familia, el registro de tierras y prevenir probables desplazamientos forzados.

5. A las Autoridades Civiles, Militares y de Policía del Departamento, la adopción de medidas urgentes tendientes a disuadir y neutralizar el accionar de los nuevos grupos armados ilegales que hacen presencia en el departamento de Sucre y en particular en la jurisdicción de San Onofre, a partir del análisis del conflicto armado en la región.
6. A las Autoridades Civiles y Militares y de Policía del departamento de Sucre, la adopción urgente de medidas que garanticen la seguridad y el ejercicio de los derechos humanos de los Miembros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Capítulo Bolívar, Sucre, Montes de María y San Onofre, líderes de organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, apoderados judiciales de las víctimas y comunidad en general, para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en lo relativo a los esquemas de protección de las organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos.
7. Informar a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, así como a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, lo pertinente a las acciones del Frente Héroes de los Montes María, y el autodenominado grupo La Nueva Generación de las estructuras paramilitares, para que en el marco de las tareas de verificación de cese al fuego y hostilidades, a propósito de negociación y desmovilización del Bloque Héroes de los Montes María de las Autodefensas, se exhorten a estas últimas al cumplimiento de los acuerdos.
8. Informar a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, -UNIFEM, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que en el marco de sus mandatos exhorten al Estado Colombiano al cumplimiento de los acuerdos.

**JORGE ENRIQUE CALERO CHACÓN**

Defensor Delegado para la Evaluación del Riesgo de la  
Población Civil Como Consecuencia del Conflicto Armado